

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA

TÍTULO PRIMERO DERECHOS FUNDAMENTALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1. El Estado de Querétaro Arteaga es parte integrante de la Federación Mexicana. Es libre y soberano en lo que se refiere a su régimen interno y solo delega sus facultades al Supremo Poder de la Federación en aquello que fije expresamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(Ref. P.O. No. 2, 12-1-07)

ARTÍCULO 2. En el Estado de Querétaro toda persona gozará de los derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Los derechos establecidos en estos ordenamientos no podrán ser limitados o restringidos mediante plebiscito o referéndum. Las autoridades del Estado salvaguardarán el régimen de derechos y libertades de todas las personas por el sólo hecho de encontrarse en el territorio estatal. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 3. Las autoridades estatales y municipales promoverán la integración, desarrollo y fortalecimiento de la familia, sus fines de unidad, convivencia armónica y ayuda mutua, imponiendo derechos y obligaciones recíprocos entre ambos cónyuges, y la preservación de los valores de la comunidad; adoptarán medidas que propicien el desarrollo físico, emocional y mental de los menores, de los jóvenes y de todos aquellos que por circunstancias particulares lo requieran; fomentarán la participación de la niñez y la juventud en actividades culturales, cívicas, sociales, ecológicas, políticas y deportivas; establecerán un sistema permanente de tutela, apoyo e integración social de los adultos mayores y de las personas discapacitadas que se encuentren en condiciones de desventaja física o mental, para facilitarles una vida de mayor calidad, digna, decorosa y su pleno desarrollo, y promoverán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población. Toda forma de discriminación será sancionada por la Ley. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

Las autoridades promoverán las condiciones de equidad necesarias para el pleno goce de la libertad, la igualdad, la seguridad y la no discriminación de las personas y garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 4. La educación que impartan los gobiernos estatal y municipales, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez de estudios, cualquiera que sea su tipo o modalidad, se ajustará a los principios que establece el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Además, promoverá el conocimiento de la geografía, la cultura y las características sociales y económicas del Estado, sus valores arqueológicos, arquitectónicos e históricos, las tradiciones, lenguas y creencias de los grupos étnicos y el papel de éstos en la configuración y desarrollo de la historia e identidad de la Nación mexicana. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

El sistema educativo estatal estará orientado a formar en los valores cívicos y democráticos y a fomentar el trabajo productivo para una convivencia social armónica, promoviendo además el desarrollo de la ciencia y tecnología. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

El Gobierno del Estado garantizará la educación básica para que las familias de escasos recursos económicos aseguren la educación básica de los menores. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

Las Universidades e Instituciones Públicas Estatales de Educación Superior tendrán derecho a recibir del Estado un subsidio suficiente y oportuno para el eficaz cumplimiento de sus fines, sin detrimento de su autonomía académica. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 5. Corresponde al Ejecutivo planear, participar, conducir, coordinar y orientar el desarrollo integral y sustentable de la Entidad para que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de individuos y grupos sociales cuya seguridad y bienestar protege esta Constitución.

(Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

El ejecutivo del Estado, con el concurso de los sectores de la sociedad, organizará el Sistema de Planeación Democrática y expedirá el Plan Estatal de Desarrollo que servirá de base a los programas de la administración pública estatal. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 6. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar integral, por lo que es obligación del Gobierno del Estado, los Municipios y sus habitantes protegerlo en beneficio de las presentes y futuras generaciones. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

La protección y conservación de los recursos naturales será prioritaria en el Estado de Querétaro, y su explotación sólo será permitida en los términos y modalidades que establezcan las leyes.

(Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

La ley establecerá las sanciones correspondientes cuando se violen los principios establecidos en este artículo, así como la obligación de reparar el daño y perjuicios ocasionados. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 7. El Gobierno del Estado y los municipales garantizarán a los individuos el derecho a la información, otorgando el derecho de rectificación conforme a la ley.

Esta Constitución privilegia el establecimiento de Archivos Públicos, cuya función primordial será el acopio, resguardo y difusión de documentos públicos, mismos que serán regulados por una ley especial de la materia. Los Archivos Públicos serán de libre acceso y sin más limitaciones que el interés estatal y en concordancia con las garantías consagradas a los queretanos en esta Constitución y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 8. Todo individuo tiene derecho al trabajo, a la salud y a disfrutar de vivienda digna y decorosa. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

El Gobierno del Estado y los gobiernos municipales promoverán la construcción de viviendas e inducirán a los sectores privado y social hacia este objeto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 9. El Estado garantizará el respeto a los derechos humanos, promoverá su defensa y proveerá las condiciones necesarias para el cabal ejercicio de los mismos. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

La libertad de expresión y de imprenta son derechos fundamentales de los queretanos, sin más límites que el respeto a la vida privada, la moral, la paz pública, los derechos de terceros o la provocación de algún delito. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

Esta Constitución reconoce los derechos de los profesionales de la comunicación, privilegiando el respeto a la integridad de su trabajo y el secreto profesional de sus fuentes de información.

(Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 10. Toda persona tiene derecho a que se le procure y administre justicia por los tribunales y órganos del Estado, los que estarán expeditos para impartirla, utilizando los principios y normas aplicables, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

El Estado instituirá un sistema integral de justicia aplicable a quienes, teniendo entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales. Los menores de doce años de edad que hayan realizado alguna conducta prevista como delito en la ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, en los términos que señale la ley. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

La operación del sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, quienes, en los términos de las leyes conducentes, podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso en particular, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente, sin demérito de los derechos de la víctima. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

Cuando resulte procedente, deberá observarse la aplicación de las formas alternativas de justicia. En los procesos seguidos a los adolescentes, se observarán las garantías del debido proceso y la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas serán proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento sólo se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves, en los términos de ley. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 11. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable de los gobernados y un derecho fundamental, las autoridades estatales y municipales, con la participación responsable de la sociedad civil, promoverán el rescate, preservación, enriquecimiento, protección, restauración y difusión del patrimonio cultural que define al pueblo queretano, mismos que son inalienables e imprescriptibles. Las leyes del Estado protegerán el patrimonio cultural de los queretanos. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

Las culturas populares gozarán de atención especial, el Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de la información cultural. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 12. La sociedad de Querétaro tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Las leyes y las autoridades promoverán y protegerán el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco constitucional. La expresión concreta de su libertad se hará efectiva mediante la autonomía de las comunidades y la potestad para elegir a sus autoridades según los usos y costumbres aplicables, sin perjuicio de la unidad nacional y estatal, en los términos establecidos por la ley. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades indígenas se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de la propiedad previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

El Gobierno del Estado y los gobiernos de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a la ley de la materia, reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo equitativo y sustentable y a una educación laica, obligatoria y pluricultural. Asimismo, impulsarán el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el estado. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

TÍTULO SEGUNDO DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO Y DE SU FORMA DE GOBIERNO

ARTÍCULO 13. La soberanía del Estado de Querétaro de Arteaga reside esencial y originalmente en el pueblo y de éste emana el Poder Público, que se instituye exclusivamente para su beneficio.

(Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Los ciudadanos ejercerán sus derechos políticos electorales a través de los partidos políticos y mediante los procesos electorales. La Ley regulará las figuras del voto, iniciativa popular y referéndum.

(Adición P.O. No. 38, 12-IX-96)

Los partidos políticos nacionales y estatales con registro tendrán derechos a participar en las elecciones estatales y municipales, en los términos que dispongan las leyes. (Adición P.O. No. 38, 12-IX-96)

Los partidos políticos son entidades de interés público, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el

acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, personal y directo. (Adición P.O. No. 38, 12-IX-96)

La ley garantizará que los partidos políticos nacionales y estatales con registro cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. (Adición P.O. No. 38, 12-IX-96)

La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, así como, los procedimientos para control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten. De igual manera establecerá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. (Adición P.O. No. 38, 12-IX-96)

ARTÍCULO 14. El Estado de Querétaro Arteaga adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su organización política y administrativa el Municipio Libre. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 15. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral de Querétaro, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan los partidos políticos nacionales y estatales con registro, y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley de la materia. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad serán principios rectores. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

El Instituto Electoral de Querétaro, será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por siete consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada partido político con registro y el secretario ejecutivo. La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos.

(Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

Los consejeros electorales serán electos por la Legislatura del Estado mediante el consenso o por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, a propuesta de los grupos parlamentarios en los términos que señala la ley. Conforme al mismo procedimiento, se designarán siete consejeros electorales suplentes, señalando el orden en que asumirán la titularidad de consejero electoral.

(Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

Los consejeros electorales durarán en su cargo siete años, pudiendo ser reelectos por un periodo más y percibirán una remuneración adecuada a sus funciones, que no será disminuida; no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en instituciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

El Consejo General elegirá por mayoría a su presidente, de entre los consejeros electorales. El secretario ejecutivo será designado por el voto de la mayoría del Consejo General, a propuesta de terna que formule su presidente. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

Los servidores del organismo público regirán su desempeño por las disposiciones de la Ley electoral y sus relaciones de trabajo por el estatuto que con base en ella apruebe el Congreso a propuesta del Consejo General. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

CAPÍTULO SEGUNDO DEL TERRITORIO DEL ESTADO

ARTÍCULO 16. El territorio del Estado de Querétaro Arteaga queda comprendido entre las Entidades federativas de: Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y San Luis Potosí.

(Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 17. La división política y administrativa del territorio de la Entidad comprende los siguientes municipios:

Amealco de Bonfil

Arroyo Seco

Cadereyta de Montes

Colón

Corregidora

El Marqués

Ezequiel Montes

Huimilpan

Jalpan de Serra

Landa de Matamoros

Pedro Escobedo

Peñamiller

Pinal de Amoles

Querétaro

San Joaquín

San Juan del Río

Tequisquiapan y

Tolimán

(Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 18. Los municipios tendrán los límites y extensiones que señale la Ley Orgánica Municipal y sus Cabeceras serán las poblaciones de sus mismos nombres, con excepción de Querétaro que tendrá por cabecera a la ciudad de Santiago de Querétaro, El Marqués que la tendrá en la Cañada y de Corregidora que la tendrá en El Pueblito. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

ARTÍCULO 19. La ciudad de Santiago de Querétaro, es la residencia oficial de los poderes del Estado y éstos no podrán trasladarse a otro lugar sino por causa grave calificada por las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

CAPÍTULO TERCERO DE LA POBLACIÓN

ARTÍCULO 20. Son queretanos quienes nazcan en territorio del Estado.

Son residentes del Estado, los que establezcan su domicilio personal de forma permanente en su territorio. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

Son ciudadanos del Estado:

- a) Los nacidos en su territorio que hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir; y,
- b) Los ciudadanos mexicanos con más de tres años de residencia.

La calidad de ciudadano de Querétaro se adquiere por el sólo cumplimiento de los requisitos anteriores, y se pierde por dejar de ser ciudadano mexicano, o por residir más de tres años consecutivos fuera de la Entidad, en caso de que la ciudadanía se haya adquirido por residencia, salvo en los casos de estudios y empleo o cargo o comisión de la Federación, del Estado o de los Municipios de la Entidad o instituciones descentralizadas de los mismos y en los demás casos que expresamente prevenga la Ley. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

La declaratoria de la pérdida de la ciudadanía queretana se tramitará y resolverá ante el Ayuntamiento que corresponda. Suspendida o perdida la ciudadanía queretana sólo se recobrará en la forma y términos que previene la Constitución o las leyes respectivas.

ARTÍCULO 21. Son prerrogativas de los ciudadanos de Querétaro:

- I. Votar para todos los cargos de elección popular en el Estado;
- II. Ser votado para cargos de elección popular en el Estado en los términos que establece esta Constitución;
- III. Asociarse libre y pacíficamente con fines políticos;

- IV. Ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado; y,
- V. Las demás que establezcan las leyes.

Los residentes mayores de 18 años tendrán las mismas prerrogativas que los ciudadanos, con excepción de la contenida en la fracción segunda de este artículo.

(Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

ARTÍCULO 22. Son obligaciones de los ciudadanos de Querétaro:

- I. Inscribirse en el padrón electoral;
- II. Desempeñar las funciones electorales en los términos de ley;
- III. Desempeñar los cargos de elección popular en los términos de las leyes relativas;
- IV. Instruirse y cuidar que sus hijos y pupilos cumplan con la educación básica de conformidad con las leyes aplicables;
- V. Prestar auxilio en las campañas alfabetizadoras y de instrucción elemental siempre que fueran requeridos;
- VI. Cooperar con el mantenimiento del orden público y la paz social; y,
- VII. Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

Los residentes mayores de 18 años tendrán las mismas obligaciones que los ciudadanos, con excepción de la contenida en la fracción tercera de este artículo. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

TÍTULO TERCERO DEL PODER PÚBLICO

CAPÍTULO PRIMERO DEL PODER LEGISLATIVO

ARTÍCULO 23. El poder público del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Nunca podrán reunirse más de una de estas funciones en una persona o grupo de personas ni depositarse el Legislativo en un individuo. (Ref. P. O. No. 6, 31-I-2006)

ARTÍCULO 24. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se nombrará Legislatura del Estado, integrada por representantes populares denominados diputados, los que serán electos cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 25. La Legislatura del Estado, se integrará con quince diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos uninominales y diez diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, en

las circunscripciones plurinominales que determine la ley y que aseguren la representación proporcional. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

La demarcación territorial de los distritos uninominales se determinará tomando en cuenta la información oficial geográfica, demográfica y socioeconómicos de las distintas regiones y localidades del Estado. (Ref. P. O. No. 6, 31-I-2006)

Los diputados por el principio de mayoría relativa o por el de representación popular tienen la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. (Ref. P. O. No. 53, 28-XII-93)

ARTÍCULO 26. Para ser Diputado se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos;
- II. Tener 21 años cumplidos el día de la elección;
- III. Ser ciudadano de Querétaro con una residencia efectiva en el Estado de cuando menos tres años anteriores a la fecha de la elección;
- IV. No desempeñar cargos de la Federación, del Estado o del Municipio, ni ejercer en términos generales funciones de autoridad, a menos que se separen de ellos noventa días antes del día de la elección; y
- V. No ser ministro de algún culto religioso. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 27. Los Diputados en ejercicio, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna comisión o empleo de la Federación, Estado o Municipio, por los cuales disfrute remuneración sin licencia otorgada por órgano competente de la Legislatura. (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

Se exceptúan de esta prohibición los cargos educativos y asistenciales. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 28. La Legislatura del Estado, expedirá un decreto con el solo efecto de dar a conocer en toda la entidad, la declaración del gobernador electo o designado que hubiere emitido, en su caso, el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, la autoridad jurisdiccional competente en la materia o la propia Legislatura. (Ref. P. O. No. 6, 31-I-2006)

ARTÍCULO 29. Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones.

La Legislatura velará por el respeto al fuero constitucional de los diputados y la inviolabilidad de sus recintos oficiales. (Ref. P.O. No. 6, 31-I-2006)

SECCIÓN PRIMERA DE LA INSTALACIÓN DE LA LEGISLATURA Y PERÍODO DE SESIONES

ARTÍCULO 30. La Legislatura del Estado se instalará el 26 de septiembre del año que corresponda y tendrá durante cada año de ejercicio dos períodos ordinarios de sesiones. El primero se iniciará el 27 de septiembre y concluirá el 31 de diciembre; el

segundo se iniciará el día 1º de abril y terminará el día 31 de julio. (Ref. P.O. No. 6, 31-I-2006)

ARTÍCULO 31. La Legislatura no podrá instalarse sin la concurrencia de las dos terceras partes del número total de sus miembros. Al iniciar, concluir o prolongar las actividades legislativas en los periodos ordinarios y extraordinarios, respectivamente, se emitirá el Decreto en los términos de ley. (Ref. P.O. No. 6, 31-I-2006)

ARTÍCULO 32. La Legislatura celebrará una sesión pública y solemne, dentro de los últimos diez días del mes de julio de cada año, a la que acudirá el Titular del Poder Ejecutivo para rendir un informe del estado general que guarde la administración pública. El Presidente de la Legislatura dará contestación al informe, refiriéndose al mismo en términos generales. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-2006).

SECCIÓN SEGUNDA DE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES

ARTÍCULO 33. La iniciativa de leyes o decretos corresponde: (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

- I. Al Gobernador del Estado; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- II. A los Diputados; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- III. Al Tribunal Superior de Justicia en materia judicial; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- IV. A los Ayuntamientos en asuntos del ramo municipal; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- V. Al Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro en materia electoral; y (Adición P.O. No. 38, 12-IX-96)
- VI. A los ciudadanos en los términos previstos en la Ley. (Adición P.O. No. 38, 12-IX-96)

ARTÍCULO 34. Cuando se discuta una iniciativa, la Legislatura podrá solicitar a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos del Estado, u organismos autónomos, que envíen un representante para que intervengan en los trabajos de estudio y dictamen. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-2006)

ARTÍCULO 35. El procedimiento a que someterán las iniciativas y dictámenes de ley, decreto o acuerdo, será el siguiente:

- I. Presentada ante la Legislatura, una iniciativa de ley, decreto o acuerdo, el presidente dará cuenta al Pleno de la Legislatura y ordenará el turno para su estudio y dictamen, a la comisión respectiva, salvo las iniciativas que se tramiten por urgencia u obvia resolución o asuntos que no se encontraran integrados en el orden del día, mismos que deberán leerse en su totalidad ante el Pleno;
- II. La Comisión que conozca, emitirá por escrito el dictamen que proceda dentro del plazo que señala la Ley, dándose cuenta al Pleno;
- III. Enseguida se someterá, por medio de un Secretario, a discusión, el dictamen respectivo, agotada la cual, se someterá a votación, en los términos de Ley. Cuando lo acuerde el Pleno, podrá someterse a discusión y a votación una

iniciativa en la misa sesión en la que se le dio lectura, cuando se califique de urgente u obvia resolución;

IV. Aprobada una iniciativa por el Pleno de la Legislatura se emitirá el proyecto correspondiente y previo trámite de Ley, se remitirá el Ejecutivo quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente;

V. Si la iniciativa es rechazada, el Presidente ordenará comunicar por escrito esta circunstancia a su autor;

VI. Se considera Ley, Decreto o Acuerdo todo proyecto no devuelto por el Poder Ejecutivo con observaciones a la Legislatura, dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción; y

VII. El Poder Ejecutivo, podrá rechazar la publicación de un proyecto de ley, decreto o acuerdo, devolviéndola con observaciones a la Legislatura, y se someterá de nueva cuenta al procedimiento legislativo, requiriéndose para su aprobación el voto de las dos terceras partes de sus miembros, en cuyo caso el Poder Ejecutivo estará obligado a su promulgación y publicación. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

ARTÍCULO 36. El Poder Ejecutivo, deberá publicar todo proyecto de ley, decreto o acuerdo que no haya observado, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y las disposiciones reglamentarias de éste, para su vigencia y validez no requerirán la promulgación, ni publicación del Poder Ejecutivo. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

ARTÍCULO 37. Todo proyecto que haya sido observado por el Poder Ejecutivo y que sea confirmado por las dos terceras partes de la Legislatura, se declarará Ley, Decreto o Acuerdo, en su caso, y se remitirá al Ejecutivo para su promulgación y publicación. En caso de que el Poder Ejecutivo no realice la publicación respectiva, en un plazo no mayor de diez días hábiles, el Poder Legislativo ordenará su publicación en los principales medios escritos de comunicación y circulación estatal, surtiendo ésta plenos efectos legales.

Las votaciones de las leyes o decretos serán siempre nominales y tratándose de acuerdos serán económicas, excepto en los casos en que la Ley establezca otro modo.

Cuando la Legislatura participe en el procedimiento a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la resolución que adopte se tomará por mayoría de votos de sus integrantes y deberá expresarse solamente a favor o en contra, pero las razones que la justifiquen podrán comunicarse al Congreso de la Unión con el acuerdo que se expida. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

ARTÍCULO 38. En la interpretación, reforma, adición o derogación de una ley, decreto o acuerdo, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

A la Legislatura le corresponde declarar sobre la naturaleza de sus resoluciones, cuando se dudare de ella. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

ARTÍCULO 39. El Poder Ejecutivo no podrá realizar observaciones a las siguientes resoluciones de la Legislatura:

I. Las relativas a los actos de su competencia en materia de juicio político y declaración de procedencia;

II. Las que se refieren a las normas que definen la organización y régimen interno del Poder Legislativo y sus disposiciones reglamentarias; y

III. Las que convoquen a elecciones extraordinarias y a sesiones de la Legislatura.

(Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

ARTÍCULO 40. Las resoluciones de la Legislatura no tendrán otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo.

Las iniciativas adquirirán el carácter de Ley cuando sean aprobadas por la Legislatura y promulgadas y publicadas por el Ejecutivo o en su caso por el Poder Legislativo.

Si la ley no señala el día en que deba comenzar a observarse, será obligatoria desde el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, o en los casos de excepción que señala esta Constitución. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

SECCIÓN TERCERA DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA LEGISLATURA

ARTÍCULO 41. Son facultades de la Legislatura:

I. Expedir su ley orgánica y su reglamento interior; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

II. Aprobar leyes en materia de educación, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

III. Ejercer el derecho de iniciativa ante el Congreso de la Unión y ser parte del Constituyente Permanente en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

IV. Legislar en materia municipal de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

V. Legislar en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en la esfera de la competencia estatal, estableciendo las bases normativas de concurrencia entre Estado y Municipios y los criterios conforme a los cuales se hará efectiva la participación social; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

VI. Legislar en materia de salud en el ámbito de la competencia Estatal, fijando las bases de concurrencia entre Estado y Municipios; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

VII. Legislar en materia de desarrollo urbano de los centros de población en la Entidad; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

VIII. Legislar en materia de patrimonio cultural y de conservación, restauración y difusión de los valores históricos y artísticos del Estado, fijando las bases que permitan el fortalecimiento de la lengua, costumbres y tradiciones de las diferentes regiones y grupos étnicos del Estado; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

IX. Expedir la ley que regule las relaciones laborales del Estado y los municipios con sus trabajadores; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

X. Normar la integración y funcionamiento del sistema de planeación democrática del desarrollo del Estado, estableciendo los medios para la participación ciudadana y la consulta popular; (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

XI. Legislar en materia de seguridad pública, policía preventiva, tránsito y transporte; (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

XII. Convocar a elecciones en los términos de esta Constitución y demás normas aplicables; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XIII. Emitir decreto mediante el cual se declare gobernador electo, y expedir el bando solemne de acuerdo a la resolución correspondiente; (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

XIV. Elegir al ciudadano que deba asumir el cargo de Gobernador con el carácter de interino o sustituto, en los casos y términos que esta Constitución prescribe; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XV. Elegir conforme a esta Constitución y demás normas aplicables, respetando los procedimientos de selección que en su caso se establezcan, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Querétaro, a los integrantes de la Comisión Estatal de Información Gubernamental; al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y a los demás servidores públicos cuya designación le compete de acuerdo con las leyes. (Ref. P. O. No. 06, 31-I-06)

XVI. Conceder licencia y admitir las renunciaciones de los diputados; del gobernador; de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los demás funcionarios cuya designación compete a la propia Legislatura; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XVII. Citar a comparecer, en comisiones o en Pleno, por conducto de los titulares, a los servidores públicos de las dependencias y organismos del Ejecutivo, del Judicial y de los Municipios, las entidades paraestatales, organismos autónomos y cualquier otra entidad pública, para que ilustren sobre algún asunto de su competencia, solicitar o recibir de los mismos la documentación e informes necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones.

La negativa reiterada y sin justificación de las autoridades a que se refiere esta fracción para comparecer ante el Pleno o las Comisiones de la Legislatura, será causa de responsabilidad en los términos de lo dispuesto por esta Constitución. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

XVIII. Conocer de las denuncias que conforme a la ley de la materia se formulen en contra de los servidores públicos a que se refiere el Título Séptimo de la presente Constitución y resolver si ha lugar o no a proceder penal o

políticamente contra el denunciado y, en su caso, seguir el procedimiento establecido en dicho apartado; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XIX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender o declarar la desaparición de algún ayuntamiento siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, cuando: (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

- a) La mayoría de los regidores propietarios y suplentes abandonen su encargo;
- b) La mayoría de los regidores propietarios y suplentes estén imposibilitados en forma definitiva para seguir desarrollando sus funciones, y
- c) Se suscite entre los miembros del ayuntamiento, o entre éste y la comunidad, conflicto que haga imposible el cumplimiento de los fines del mismo o el ejercicio de sus funciones;

XX. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá revocar el mandato de alguno de los miembros del ayuntamiento, suspenderlos o inhabilitarlos, por alguna de las causas graves que la ley señale, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan; (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

XXI. Designar a los Concejos Municipales cuando se suspenda o se declare desaparecido un ayuntamiento de conformidad con la ley de la materia. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

Cuando la desaparición del ayuntamiento ocurra durante el primer año del periodo constitucional, la Legislatura o la Comisión Permanente, en su caso, emitirá el decreto correspondiente, para que el Instituto Electoral de Querétaro organice la elección popular.

Si la desaparición del ayuntamiento ocurre durante los dos últimos años de su gestión, el Concejo Municipal permanecerá en funciones hasta el término del periodo constitucional;

XXII. Crear nuevos Municipios dentro de los límites de los ya existentes, siempre que tengan los elementos necesarios para poder subsistir; (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

XXIII. Decretar la traslación provisional de los Poderes de la Entidad fuera de la ciudad de Santiago de Querétaro, en los casos y condiciones previstas en esta Constitución; (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

XXIV. Aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, así como la Ley de Ingresos de cada municipio, previo estudio, discusión y, en su caso, modificación a los proyectos enviados, una vez aprobadas las contribuciones en el caso del presupuesto estatal que, a su juicio, deban decretarse para cubrirlo. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

En tanto no se aprueben y entren en vigor alguna de las leyes o Presupuesto de Egresos a que se refiere esta fracción, se aplicarán de manera provisional para el siguiente ejercicio fiscal las leyes de ingresos estatal y municipal, y el presupuesto de egresos del ejercicio Fiscal anterior. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

XXV. Para expedir la Ley que regule la organización de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de la administración pública estatal y privada que maneje recursos públicos, y pedir informes a dicho organismo, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, al desempeño de las funciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, en los términos que disponga la ley; (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

XXVI. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que contrate empréstitos conforme a lo previsto por esta Constitución y otorgue avales para garantizar obligaciones legalmente contraídas; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XXVII. Conceder al Ejecutivo por tiempo limitado y por voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, las facultades extraordinarias que fueren absolutamente indispensables para salvar la situación, en los casos de invasión, alteración del orden público o cualquier otro motivo grave y sólo respecto de aquellas facultades que no son de la exclusiva competencia del Congreso de la Unión; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XXVIII. Decretar amnistía por delitos de la competencia de los tribunales del Estado; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XXIX. Sustituir a los Diputados en ejercicio, cuando sin causa justificada a juicio de la Legislatura, falten a tres sesiones ordinarias consecutivas en un mes, entendiéndose que dichos diputados renuncian a concurrir hasta el periodo ordinario inmediato, llamándose desde luego a los suplentes; (Ref. P.O. No. 50, 10-XII-99)

XXX. Expedir la convocatoria para elecciones de Diputados, cuando ocurra falta absoluta del propietario y del suplente durante los dos primeros años del ejercicio legal de la Legislatura. La convocatoria definirá los procedimientos de acuerdo al sistema electoral por el que haya sido electo el Diputado ausente (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

XXXI. Legislar sobre todo aquello que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no conceda expresamente al Congreso de la Unión; y (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XXXII. Aprobar los convenios de asociación para la prestación de servicios públicos o ejercicio de funciones que celebre un Municipio del Estado con algún Municipio de otro Estado de la República Mexicana; (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

XXXIII. Por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, en materia municipal territorial en los términos de esta Constitución y de la Ley, podrán: (Adición P.O. No. 37, 15-IX-00)

- a) Ratificar los arreglos o convenios concertados entre los ayuntamientos con motivo de la fijación de los límites de sus respectivos territorios municipales.

b) Resolver sobre la supresión y/o fusión de Municipios por las causas que la ley señale.

c) Aprobar los convenios que el Ejecutivo celebre con sus homólogos de las Entidades vecinas sobre cuestiones de límites y someterlos a la ratificación del Congreso de la Unión;

XXXIV. Aprobar, reformar, abrogar o derogar leyes, decretos y acuerdos en todos los ramos de la administración pública del Estado y de todos aquellos en los cuales la Legislatura del Estado tenga facultades de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

XXXV. Todas las demás que esta Constitución y las leyes le otorguen. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

ARTÍCULO 42. Son deberes de los diputados:

I. Concurrir puntualmente a las sesiones de la Legislatura;

II. Despachar, dentro del plazo que señale el Reglamento, los asuntos que se dictaminen;

III. Emitir su voto en los asuntos que se sujeten a deliberación de la Legislatura;

IV. Mantener permanente acercamiento con la población; y

V. Las demás que consignent las leyes y reglamentos.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo reglamentará lo referente a las faltas temporales y absolutas de los Diputados. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

SECCIÓN CUARTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE

ARTÍCULO 43. La Comisión Permanente, es el órgano electo por el Pleno de la Legislatura en la última sesión de los períodos ordinarios, y ejercerá las facultades establecidas en el artículo 44 de esta Constitución. Se compondrá por un Presidente, un Vicepresidente, un Primer Secretario y un Segundo Secretario, teniendo estos últimos sus respectivos suplentes. (Ref. P.O. No. 50, 10-XII-99)

Derogado. (P.O. No. 50, 10-XII-99)

ARTÍCULO 44. Las facultades y obligaciones de la Comisión Permanente son: (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

I. Conocer y desahogar los asuntos que no sean de competencia exclusiva del Pleno de la Legislatura y ordenar el turno a Comisión para su estudio y dictamen de las iniciativas de ley, decreto o acuerdo que se reciban fuera de los períodos ordinarios. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

II. En los casos previstos por esta Constitución; acordar por sí o a petición del Ejecutivo, la convocatoria a período extraordinario, determinando la fecha para el

mismo mediante decreto. Asimismo podrá adicionar o derogar algún asunto del decreto respectivo cuando así convenga. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-2006)

III. El Gobernador del Estado publicará el decreto respectivo, en un término no mayor de tres días hábiles, sin que sea impedimento para emitir y girar las convocatorias correspondientes a las sesiones extraordinarias. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

IV. Conceder licencias para separarse temporalmente del cargo al gobernador, así como a diputados y magistrados y en su caso tomar la protesta a los suplentes; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

V. Instalar juntas preparatorias de la nueva Legislatura acorde con la Ley Orgánica y su Reglamento; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

VI. Nombrar Gobernador Provisional en los casos que previene esta Constitución; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

VII. Acordar con el Ejecutivo el cambio de la residencia temporal de los órganos del poder público, en casos de suma urgencia o gravedad. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

VIII. Conceder en los casos que establezca esta Constitución facultades extraordinarias al Ejecutivo; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

IX. Vigilar la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y demás leyes, dando cuenta a la Legislatura en su primera reunión ordinaria de las infracciones que hubiere advertido; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

X. Recibir los expedientes electorales de elección de gobernador y diputados acorde con las disposiciones de las leyes de la materia; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XI. Admitir las renunciaciones de los funcionarios y empleados nombrados por sí o por la Legislatura; y (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XII. Las demás que le asigna la presente Constitución y las leyes reglamentarias. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

SECCIÓN QUINTA DE LOS PERÍODOS EXTRAORDINARIOS

ARTÍCULO 45. La Legislatura podrá celebrar períodos extraordinarios de sesiones cuando para ello fuera convocada por la Comisión Permanente. (Adición P.O. No. 50, 10-XII-99)

ARTÍCULO 46. La Legislatura reunida en periodo extraordinario de sesiones sólo se ocupará del asunto para el cual fue convocada. Si llegado el tiempo de periodo ordinario hubiere sesión extraordinaria, ésta cesará; y el motivo que le dio origen se continuará en sesión ordinaria. (Adición P.O. No. 50, 10-XII-99)

SECCIÓN SEXTA DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 47. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado dependerá jerárquicamente del Poder Legislativo y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio de conformidad con la ley, además contará con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley orgánica y las demás leyes aplicables. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño y tendrá a su cargo primordialmente:

I. Fiscalizar, en forma posterior, los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, los Municipios, los organismos constitucionales autónomos, los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y municipal, los fideicomisos y en general cualquier persona física o moral, que recaude, administre, maneje o ejerza recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, estatales y municipales.

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Legislatura del Estado, dentro del plazo que establezca la ley. Dentro de dicha información se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismos que tendrán carácter público.

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley orgánica establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

III. Investigar los actos y omisiones que impliquen una irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, registro, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, estatales y municipales y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles, bases de datos o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos.

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, Estatal y Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales en los términos de la ley reglamentaria, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Séptimo de esta Constitución y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

La Legislatura del Estado designará al titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Dicho titular durará en su encargo seis años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez.

Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas señaladas en el Título Séptimo de esta Constitución con la misma votación requerida para su nombramiento y conforme a los procedimientos que la ley prevea.

Para ser titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado se requiere:

- a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos treinta años cumplidos el día de su designación;
- b) Poseer al día de su designación con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciatura afín a las funciones de la Entidad;
- c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión; pero si se tratare de falsificación o delito patrimonial u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, el aspirante no podrá ser electo para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

Durante el ejercicio de su encargo y tres años anterior a su designación el titular de la Entidad no podrá formar parte de ningún partido político, ni haber sido dirigente o candidato de elección popular. Tampoco podrá, durante su encargo, desempeñarse en otro empleo, cargo o comisión, salvo las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización estarán obligados, en los términos de ley, a rendir cuentas del ejercicio presupuestal que corresponda ante la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, así como a facilitar los auxilios que requiera la misma para el ejercicio de sus funciones.

El Poder Ejecutivo aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo; para el caso de los municipios este procedimiento será aplicado por la autoridad fiscal correspondiente. (Ref. P.O. No. 02, 12-I-07)

CAPÍTULO SEGUNDO DEL PODER EJECUTIVO

SECCIÓN PRIMERA DE LA ELECCIÓN Y REQUISITOS

ARTÍCULO 48. El Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominará Gobernador del Estado. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

El Gobernador del Estado entrará a ejercer su cargo el día 1o. de octubre del año de su elección y su ejercicio durará seis años. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 49. La elección del Gobernador del Estado será directa en los términos dispuestos por la Ley Electoral.

El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

(Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 50. Para ser Gobernador se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del Estado de Querétaro, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
- II. Tener 30 años cumplidos el día de la elección;
- III. No desempeñar cargo o comisión de la Federación, del Estado o del Municipio, a menos que se separe definitivamente de estos, noventa días antes de la fecha de la elección;
- IV. No ser militar en servicio activo o ciudadano con mando en los cuerpos policíacos o de seguridad pública, a menos que se separe definitivamente noventa días antes del día de la elección; y,
- V. No ser ministro de algún culto religioso. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

ARTÍCULO 51. No podrán ser electos para el período inmediato:

- I. El gobernador sustituto, que es el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aún cuando tenga distinta denominación; y
- II. El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 52. En las ausencias o faltas temporales del Gobernador del Estado se observarán las siguientes reglas:

I. Las ausencias que excedan de treinta días pero no pasen de noventa, la suplencia la hará el Secretario de Gobierno con el carácter de encargado del despacho, pero el Gobernador solicitará la licencia respectiva a la Legislatura o Comisión Permanente, según el caso; y (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

II. Si la falta temporal excede de noventa días, la Legislatura designará Gobernador Interino. (Ref. P.O. No. 50, 10-XII-99)

El Gobernador, para poder ausentarse del territorio del Estado por más de treinta días, solicitará permiso a la Legislatura o Comisión Permanente según el caso. (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

III. Tratándose de asuntos oficiales, el Gobernador del Estado no podrá ausentarse del territorio nacional sin previo aviso sobre su destino, a la Legislatura del Estado o a la Comisión Permanente, según el caso. (Adición P.O. No. 50, 10-XII-99)

ARTÍCULO 53. La designación del Gobernador, que realice la Legislatura, se hará por mayoría absoluta de votos del número total de diputados. (Ref. P.O. No. 50, 10-XII-99)

Si al ocurrir la ausencia del Gobernador, la Legislatura no se encuentra en periodo ordinario de sesiones, la Comisión Permanente convocará de inmediato a periodo extraordinario para el solo efecto de designar al Gobernador Interino. (Ref. P.O. No. 50, 10-XII-99)

ARTÍCULO 54. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado se observarán las reglas siguientes:

I. Si la falta ocurre durante los dos primeros años del período constitucional, y la Legislatura estuviera en periodo ordinario de sesiones, ésta elegirá un Gobernador Interino, expidiendo en ese mismo momento la convocatoria para la elección popular del Gobernador que habrá de concluir el período correspondiente. Entre la fecha de la convocatoria y la verificación de la elección deberá haber un plazo de dos a cuatro meses;

II. Si la Legislatura no estuviera en periodo ordinario de sesiones, la Comisión Permanente nombrará un Gobernador Provisional y de inmediato se convocará a sesión de la Legislatura en la que ésta designe al Gobernador Interino, procediéndose luego en los términos de la fracción anterior;

III. Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurriese en los últimos 4 años del período respectivo, si la Legislatura no estuviera en periodo ordinario de sesiones, la Comisión Permanente nombrará un Gobernador Provisional y simultáneamente convocará a la Legislatura a sesión para que haga la elección de Gobernador Sustituto, quien habrá de concluir el período; y

IV. Si al iniciar el período constitucional no se presentare el Gobernador electo, o la elección no estuviese hecha o declarada, cesará sin embargo el Gobernador cuyo período haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de Gobernador Interino el que designe la Comisión Permanente con el carácter de provisional, procediéndose luego conforme a la fracción I de este artículo. (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

ARTÍCULO 55. El Gobernador del Estado, cualquiera que sea su denominación: interino, provisional o sustituto, al tomar posesión del cargo rendirá ante la Legislatura o ante la Comisión Permanente, según el caso, la siguiente protesta: (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y todas las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido por el bien y prosperidad de la República y de esta Entidad Federativa”. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

“Si así no lo hiciere, que el Estado y la Nación me lo demanden”. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 56. El cargo de gobernador debe preferirse a cualquier otro del Estado, y sólo es renunciable por causa grave, calificada por la Legislatura. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

SECCIÓN SEGUNDA DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 57. Son facultades del Gobernador del Estado las siguientes:

- I. Promulgar, publicar, ejecutar y reglamentar las leyes del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- II. Promover ante la Legislatura las iniciativas de leyes y decretos que juzgue conveniente para el mejoramiento de la administración pública y respecto de todas aquellas materias reservadas al Estado; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- III. Preservar el orden, la tranquilidad y la seguridad social de los habitantes del Estado; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- IV. Rendir anualmente un informe ante la Legislatura sobre el Estado que guarde la administración pública; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- V. Excitar a la Comisión Permanente a que convoque a la Legislatura a sesiones, señalando el asunto o asuntos que habrán de tratarse, de acuerdo a la ley; (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)
- VI. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del Poder Ejecutivo cuyo nombramiento o remoción no estén determinados en esta Constitución o en las Leyes; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- VII. Presentar a la Legislatura las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- VIII. Otorgar a las autoridades judiciales de la entidad los apoyos necesarios para el desempeño de sus funciones y hacer cumplir los fallos y demás resoluciones de la autoridad judicial; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- IX. Conceder indultos y conmutación de penas en los términos y condiciones que establezca la legislación penal de la entidad; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- X. Contratar empréstitos y garantizar las obligaciones que de ellos se deriven en los términos de la ley respectiva y, en su caso, con la autorización previa de la Legislatura; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- XI. Expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos y otorgar concesiones a los particulares para este mismo efecto; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- XII. Celebrar convenios con la federación, los municipios y con particulares respecto de la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)
- XIII. Ejercer, con la participación corresponsable de partidos políticos y ciudadanos, las facultades en materia de preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales, y garantizar la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo de los mismos; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XIV. Designar a los fedatarios públicos en los términos de la ley de la materia; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XV. Promover el desarrollo equilibrado y armónico del Estado en materia económica, social y cultural; (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

XVI. Organizar y conducir la planeación democrática del desarrollo del Estado y establecer los medios para la participación ciudadana y la consulta popular. En la elaboración de los proyectos de desarrollo regional realizados por el Estado se dará participación a los respectivos Municipios; y (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

XVII. Las demás que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes y ordenamientos que de ambas se deriven. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 58. Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias, organismos y entidades cuyo funcionamiento establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 59. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador deberán estar firmados por el Secretario de Gobierno y por el secretario o secretarios y titulares de organismos descentralizados o entidades paraestatales del ramo al que el asunto corresponda. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 60. Los titulares de las dependencias, organismos y entidades de la administración pública del Estado deberán comparecer ante la Legislatura del Estado cuando ésta, por conducto del titular del Poder Ejecutivo, los cite para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

SECCIÓN TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO

ARTÍCULO 61. El Ministerio Público es la institución que tiene por objeto velar por el cumplimiento de las leyes; ejercer las acciones que procedan en contra de quienes las transgredan; hacer efectivos los derechos del Estado e intervenir en los juicios que afecten a las personas a quienes la ley otorga protección. Ejercerán las facultades del Ministerio Público un Procurador General de Justicia y los agentes que la ley determine.

Para la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes la Procuraduría General de Justicia contará con un cuerpo policíaco de investigación que estará bajo el mando directo del Ministerio Público.

(Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 62. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia establecerá las atribuciones, funciones y estructura de la institución del Ministerio Público. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

CAPÍTULO TERCERO DEL PODER JUDICIAL

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 63. Se deposita el ejercicio de la función judicial en un Tribunal Superior de Justicia, en los juzgados y demás órganos que establezcan su ley orgánica.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, salvo aquellas facultades que la ley confiera expresamente al Tribunal Superior de Justicia, recaerán en un Consejo de la Judicatura, que será el encargado también del desarrollo de la carrera judicial de los funcionarios que no pertenezcan a dicho tribunal. El Consejo de la Judicatura contará con independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones.

Entre sus facultades estará la fijación de criterios para la formación de los servidores públicos del poder judicial, supervisar la elaboración y aplicación de exámenes de ingreso y promoción a la carrera judicial, ejercer la potestad disciplinaria, decidir y expedir nombramientos y elaborar el presupuesto de las áreas a su cargo, llevar las estadísticas necesarias que permitan la evaluación del desempeño de los funcionarios del poder judicial, así como expedir los reglamentos necesarios para las funciones del mismo Consejo, de sus dependencias administrativas y órganos jurisdiccionales, con excepción del reglamento del Tribunal Superior de Justicia. Dicho Consejo se integrará por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior, que también lo presidirá y dos magistrados electos por el Pleno del Tribunal. Durarán en su encargo tres años, con excepción de su Presidente, que permanecerá en su encargo mientras ostente también el de Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El Poder Judicial contará con un centro encargado de la mediación como medio alternativo de solución de conflictos, cuyas funciones, competencias y estructura serán determinados en ley.

(Ref. P.O. No. 57, 28-X-05)

ARTÍCULO 64. Compete al Poder Judicial la facultad de resolver controversias a través de la aplicación de los principios y las leyes, en asuntos judiciales del fuero común en materia civil, familiar, penal, de menores y electoral. De igual forma lo harán en materia federal cuando así lo faculten las leyes. Los juzgadores privilegiarán la mediación en todo momento cuando las características del juicio lo permitan. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 65. Las leyes establecerán los medios necesarios que garanticen la independencia de los órganos encargados de la función jurisdiccional y la plena ejecución de sus resoluciones.

Los juzgadores gozarán de absoluta independencia para la conducción de los procesos a su cargo así como para el dictado de las resoluciones respectivas. Esta prohibido a toda autoridad judicial, administrativa o legislativa, asociación, grupo o persona en lo particular, que no sean parte dentro de juicio, intentar influir en las decisiones de los juzgadores.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá las bases para la carrera judicial, misma que tendrá como principios la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, actualización e independencia.

El monto que asigne anualmente la Legislatura del Estado al Poder Judicial como presupuesto no podrá ser menor al aprobado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del año inmediato anterior.

(Ref. P.O. No. 57, 28-X-05)

SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ARTÍCULO 66. El Tribunal Superior de Justicia se compondrá cuando menos de doce magistrados propietarios y ocho supernumerarios, electos por la Legislatura del Estado.

El Tribunal Superior de Justicia tendrá un Presidente, que lo será también del Poder Judicial, mismo que será electo de entre los magistrados propietarios por mayoría absoluta y que durará tres años en su encargo, sin posibilidad de reelección inmediata.

El Tribunal funcionará en pleno o en salas, ya sean colegiadas o unitarias, con magistrados propietarios o supernumerarios, en su caso.

(Ref. P.O. No. 57, 28-X-05)

ARTÍCULO 67. Los magistrados serán electos para un periodo de tres años, siendo electos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura del Estado. Podrán ser electos por la Legislatura para un periodo inmediato de nueve años más, escuchando la opinión que sobre el desempeño del magistrado manifieste el Consejo de la Judicatura y el pleno del Tribunal Superior de Justicia. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus funciones en los términos que prescribe el Título Séptimo de esta Constitución o por falta grave establecida en la ley y determinada por el Consejo de la Judicatura. Ninguna persona podrá ocupar el cargo de magistrado, en forma consecutiva ni discontinua por más de 12 años.

Al vencimiento de dicho plazo o antes si el magistrado llega a la edad de setenta años, cesará en sus funciones y tendrá derecho a un haber por retiro.

Los magistrados supernumerarios serán nombrados cada tres años por la Legislatura, para lo que se requerirá el mismo número de votos requeridos para la designación de los magistrados propietarios. El ejercicio como magistrado supernumerario no contabilizará para efectos de los tiempos establecidos en la fracción primera del presente artículo, en caso de que fuese electo como magistrado propietario.

Tanto para el primer periodo y, en su caso, para una segunda elección como magistrado propietario o para elegir magistrados supernumerarios, la Legislatura tomará en cuenta, además, las propuestas de instituciones idóneas de los sectores público, privado o social que ésta considere.

Al inicio de sus funciones, los magistrados propietarios y supernumerarios otorgarán protesta de ley ante el Pleno de la Legislatura del Estado o la Comisión Permanente, fuera de los periodos ordinarios.

(Ref. P.O. No. 57, 28-X-05)

ARTÍCULO 68. Para ser magistrado se requiere:

- I. Cumplir con los requisitos fijados en las fracciones I a IV del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- II. Haber residido en el estado los dos años anteriores inmediatos al día de su designación;
- III. No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido Secretario del gobierno local o su equivalente, o Procurador General de Justicia del Estado, durante el año previo a su nombramiento; y
- IV. No ser mayor de 70 años cumplidos al día de la elección.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial del Estado de Querétaro serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. (Ref. P.O. No. 57, 28-X-05)

ARTÍCULO 69. La remuneración que perciban los magistrados por la prestación de sus servicios será adecuada e irrenunciable y no podrá disminuirse, ni retrasarse o condicionarse de forma alguna su pago durante el ejercicio de su cargo.

(Ref. P.O. No. 57, 28-X-05)

ARTÍCULO 70. Es competencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia:

- I. Ejercer el derecho de iniciativa ante la Legislatura del Estado en materia judicial;
- II. Aprobar sus reglamentos;
- III. Procesar y sentenciar los litigios que no sean competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Senado de la República y que surjan entre:
 - a) Poder Ejecutivo y Legislatura del Estado;
 - b) Poder Ejecutivo o Legislatura del Estado con algún organismo constitucional autónomo;
 - c) Municipios del Estado con organismos constitucionales autónomos, el Poder Ejecutivo o Legislatura del Estado; y
 - d) Los Municipios del Estado.
- IV. Conocer como jurado de sentencia en las causas de responsabilidad a que se refiere el título séptimo de esta Constitución;
- V. Presentar a la Legislatura un informe por escrito sobre el estado que guarde la impartición de justicia en la entidad, en el mes de septiembre de cada año;
- VI. Elegir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia; y

VII. Las demás que establezcan las leyes (Ref. P.O. No. 57, 28-X-05)

ARTÍCULO 71. Los jueces de la entidad serán designados por el Tribunal Superior de Justicia a propuesta del Consejo de la Judicatura con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán en su encargo seis años pudiendo ser ratificados en los términos que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial y desempeñaran su función mientras no fueren declarados legalmente incapaces o sean removidos ya sea en términos del Título Séptimo de esta Constitución o por falta grave establecida en la ley y determinada por el Consejo de la Judicatura.

La remoción por falta grave, tanto en el caso de magistrados como jueces, deberá determinarse previo procedimiento establecido en ley en el que se respeten la garantía de audiencia y mediante determinación fundada y motivada.

Para ser designado juez deberán cubrirse los siguientes requisitos:

- I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
- II. Contar al menos con 30 años de edad al momento del nombramiento;
- III. Contar, el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y
- IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

Cuando un juez advierta que una norma legal puede resultar injusta, podrá presentar por escrito ante el Pleno del Tribunal Superior las consideraciones que estime pertinentes, a efecto que dicho órgano proceda al análisis de las mismas y, en su caso, a elaborar y presentar el proyecto de la iniciativa de ley correspondiente. (Ref. P.O. No. 57, 28-X-05)

TÍTULO CUARTO DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO PRIMERO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 72. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía y será independiente de cualquier autoridad administrativa. Tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las dependencias administrativas estatales y municipales con los particulares. Tendrá la organización, jurisdicción y competencia que le atribuya la ley que apruebe la Legislatura. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 73. Este Tribunal residirá en la ciudad de Santiago de Querétaro y estará integrado por el o los Magistrados propietarios y supernumerarios respectivos que determine la ley. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-97)

Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán designados por la Legislatura y deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen a los Magistrados del Tribunal Superior de justicia. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

CAPÍTULO SEGUNDO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

ARTÍCULO 74. Derogado. (P.O. No. 38, 12-IX-96)

ARTÍCULO 75. Derogado. (P.O. No. 38, 12-IX-96)

CAPÍTULO TERCERO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

ARTÍCULO 76. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado será un órgano colegiado dotado de plena autonomía e independencia que tiene por objeto conocer y resolver los conflictos que se susciten entre las dependencias públicas del Estado y Municipios con sus trabajadores y sobre los conflictos sindicales o intersindicales. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 77. Este Tribunal se integrará por lo menos de tres magistrados propietarios que serán designados en los términos que establezca la ley respectiva. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

TÍTULO QUINTO DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 78. El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro Arteaga. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

Las competencias establecidas por esta Constitución al gobierno municipal se ejercerán por los ayuntamientos de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éstos y el Gobierno del Estado. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 79. Los Municipios tienen personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. Serán gobernados por un ayuntamiento de elección popular directa el cual se compondrá: (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

I. De un presidente municipal que política y administrativamente será el representante del municipio, el cual no podrá ser electo para ningún cargo del Ayuntamiento, en el periodo inmediato; y, (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

II. De un número determinado de regidores y de síndicos, los cuales no podrán ser electos para dichos cargos en el periodo inmediato siguiente. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

Las personas que por elección indirecta, por nombramiento o por designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se le dé, no podrán ser electos para el período inmediato. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 80. Los ayuntamientos se integrarán con el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional y síndicos que determina la Ley.

La determinación del número de regidores en cada ayuntamiento se basará en factores geográficos, demográficos y socioeconómicos de cada Municipio.

Los regidores electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional tienen la misma categoría e iguales derechos y obligaciones.

Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años y los miembros que los integran otorgarán protesta entre ellos mismos al entrar en funciones el primero de octubre, del año de su elección.

(Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 81. Para ser miembro del ayuntamiento se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano;
- II. Tener residencia en el Estado de por lo menos cinco años y en el Municipio de por lo mínimo tres años, en ambos casos anteriores al día de la elección; (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)
- III. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)
- IV. Ser mayor de veintiún años; (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)
- V. Estar inscrito en el padrón electoral y tener credencial de elector; (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)
- VI. En los tres años anteriores al día de la elección no haber ejercido el cargo de consejero electoral o director general del Instituto Electoral del Estado o magistrado del órgano jurisdiccional que conozca de la materia electora; (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)
- VII. No desempeñar ningún cargo público en el que se ejerzan funciones de autoridad en ningún Municipio, ni pertenecer al ejército, ni tener mando de fuerzas en el mismo Municipio, a menos que en estos casos se solicite licencia o se renuncie al empleo, cargo o comisión cuando menos noventa días antes de la elección; y (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)
- VIII. No ser ministro de algún culto religioso. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

Los miembros de los Concejos Municipales que sean designados por la Legislatura del Estado, en los casos previstos por esta Constitución, deberán cumplir con los mismos requisitos que señala este artículo.

(Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 82. Las faltas temporales del Presidente Municipal, serán suplidas por el regidor propietario que nombre el ayuntamiento. La falta absoluta ocurrida en el primer año, será suplida interinamente por el regidor que designe el mismo ayuntamiento, debiendo la Legislatura o la Comisión Permanente, en su caso, emitir el Decreto correspondiente, para que el Instituto Electoral del Estado organice la elección popular. (Ref. P.O. No. 50, 10-XII-99)

Si la falta absoluta ocurriere del segundo año en adelante, el ayuntamiento elegirá de entre los regidores propietarios al que deba desempeñar la presidencia hasta terminar el período municipal. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

El cargo de regidor no es renunciable sino por causa grave y justificada que calificará y resolverá el mismo ayuntamiento. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 83. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidiere la Legislatura del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 84. El objeto de las leyes a que se refiere el artículo anterior será establecer:

- a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
- b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento;
- c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren los artículos 85 y 86 de esta Constitución, así como lo relativo al segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno del Estado asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura del Estado considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
- e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

La Legislatura del Estado emitirá las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Poder Ejecutivo, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de este artículo. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 85. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público;
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y centrales de abasto;
- e) Panteones;
- f) Rastros;
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h) Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito; y
- i) Los demás que la Legislatura del Estado determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Los Municipios, previo acuerdo de sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de la Legislatura del Estado. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 86. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a su favor; y en todo caso:

- a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan las Leyes sobre propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura del Estado.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las Leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 87. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la Legislatura del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

La Legislatura del Estado aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas públicas. Los Ayuntamientos deberán presentar el estado que guarde su cuenta pública a la Legislatura del Estado por conducto de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley. (Ref. P.O. No. 06, 31-I-06)

ARTÍCULO 88. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

- a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
- b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
- c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia;
- d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
- e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
- f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 89. El Presidente Municipal, dentro de los diez últimos días del mes de septiembre, de cada año, rendirá en sesión solemne y pública del ayuntamiento, un informe por escrito de la situación general que guarde la administración municipal. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

ARTÍCULO 90. La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. (Ref. P.O. No. 37, 15-IX-00)

TÍTULO SEXTO DE LA HACIENDA DEL ESTADO

ARTÍCULO 91. La Hacienda Pública del Estado estará constituida por los bienes muebles e inmuebles comprendidos en su patrimonio; por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que en su favor establezcan las leyes de la entidad, así como por las participaciones de carácter federal que legalmente le correspondan. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 92. Los Poderes del Estado ejercerán de manera independiente su Presupuesto de Egresos.

Todo servidor público recibirá una remuneración adecuada, equitativamente e irrenunciable por el desempeño de su cargo, empleo o comisión, la cual será fijada anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado o de los Municipios.

Nadie podrá desempeñar a la vez dos o más cargos remunerados, exceptuándose los educativos y los asistenciales. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 93. No podrán contratarse empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas conforme a las bases que establezca la Legislatura en una ley en la que se prevean los conceptos y hasta por los montos que se fijan en los presupuestos correspondientes. El Ejecutivo del Estado y los Presidentes Municipales deberán informar de los resultados del ejercicio de esta facultad al rendir la cuenta pública. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 94. Ningún impuesto podrá establecerse si no se destina a los gastos públicos y ningún pago podrá hacerse si no está expresamente autorizado por el Presupuesto de Egresos del Estado o de los Municipios. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

**TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO**

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 95. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considerarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los magistrados del Poder Judicial, a los funcionarios, empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquiera de los órganos del Estado, de la administración pública municipal u organismos electorales, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

El Gobernador del Estado, durante su ejercicio constitucional, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común. Podrá también ser sujeto de juicio político en los términos del artículo 110, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Los Diputados a la Legislatura del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Administrativos, los Titulares de las Secretarías, el Oficial Mayor, el Procurador General de Justicia, los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, y el Presidente, Secretario Ejecutivo y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, son responsables por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Constitución y a las Leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos del Estado o de los Municipios. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 96. La Ley de Responsabilidades de los servidores públicos que expida la Legislatura del Estado y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter incurran en responsabilidades, se ajustarán a las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 97, a los servidores públicos señalados en el mismo, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho;

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y circunstancias en los que deba sancionarse penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su cargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños de ellos, cuya procedencia lícita no pudieran justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Legislatura del Estado respecto de las conductas a que se refiere el presente artículo. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 97. Podrán ser sujetos a Juicio Político los Diputados a la Legislatura, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces, los Titulares de las Secretarías, el Oficial Mayor, los Directores de Administración Pública Estatal, el Procurador General de Justicia, los Subprocuradores, los Agentes del Ministerio Público, los Magistrados de los Tribunales Administrativos, los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, de sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y de fideicomisos públicos; el Presidente, Secretario Ejecutivo y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. (Ref. P.O. No. 2, 12-IX-07)

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Legislatura procederá a la acusación respectiva ante el Tribunal Superior de Justicia, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquélla, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Conociendo de la acusación el Tribunal Superior de Justicia, erigido en jurado de sentencia, cumplirá con las normas procesales y, en su caso, aplicará la sanción correspondiente. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 98. Para proceder penalmente contra los diputados de la Legislatura, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces, los magistrados de los Tribunales Administrativos, los Titulares de las Secretarías, el Oficial Mayor, el Procurador General de Justicia; los Presidentes Municipales, y los Consejeros Electorales, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Legislatura declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder en contra del inculpado. (Ref. P.O. No. 38, 12-IX-96)

Si la resolución de la Legislatura fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Si la Legislatura declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

En demandas de orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Las sanciones se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños y perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 99. No se requerirá declaración de procedencia de la Legislatura cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 97, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo inmediato anterior, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 100. La Ley de Responsabilidades determinará las obligaciones de los servidores públicos a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones y las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución o inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 96, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa, se causen en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

ARTÍCULO 101. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeñe alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 98. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 96. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

ARTÍCULO 102. Todos los servidores públicos que tuviesen a su cargo caudales públicos del Estado o de los municipios, garantizarán su manejo. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Para los efectos de lo previsto en este título, las declaraciones y resoluciones de la Legislatura o del Tribunal Superior de Justicia son inatacables. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

TÍTULO OCTAVO DE LA REFORMA E INVOLABILIDAD DE ESTA CONSTITUCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 103. Esta Constitución es la Ley fundamental del Estado y deberá estar conforme con las normas y principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de distribución de competencias y los tratados internacionales firmados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República y sólo podrá reformarse por el voto de las dos terceras partes del número total de integrantes de la Legislatura y por las dos terceras partes de los Ayuntamientos y en caso de rechazo, éstos deberán fundar y motivar su determinación, de lo contrario se entenderá como aprobada. (Ref. P.O. No. 2, 12-I-07)

La Legislatura del Estado, al discutir reformas a la Constitución, se sujetará a los trámites establecidos para la formación de las leyes. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

Si transcurrieren más de treinta días naturales después de que los ayuntamientos recibieron la propuesta de reformas para su consideración y, en su caso, aprobación, sin que la Legislatura reciba el acuerdo municipal respectivo, se entenderá que las reformas quedan aprobadas. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

La Legislatura, o la Comisión Permanente en su caso, hará el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos y expedirá de inmediato la declaración que corresponda. (Ref. P.O. No. 38, 19-IX-97)

ARTÍCULO 104. Esta Constitución no perderá su fuerza y su vigor aún cuando por cualquier causa se interrumpa su observancia. En caso de que por algún transtorno público se impusiere un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, en cuanto el orden y la legalidad se reimplanten, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados los que la hubieren interrumpido. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

TÍTULO NOVENO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 105. Cuando se declaren desaparecidos los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría de votos, nombrarán gobernador provisional. Si desaparecieren los tres poderes, será gobernador por ministerio de ley el último Presidente del Tribunal Superior de Justicia; a falta de éste, y en orden regresivo, los diputados presidentes de la Legislatura anterior a la desconocida. (Ref. P.O. No. 1, 3-I-91)

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Esta Constitución se publicará con la mayor solemnidad, y comenzará a regir el día 16 del corriente mes, fecha en la cual presentarán la Protesta de Ley, ante la Legislatura, el Gobernador y los Magistrados Propietarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los demás funcionarios y empleados protestarán al día siguiente, ante las autoridades que corresponda.

ARTÍCULO SEGUNDO. El actual período constitucional comenzará a contarse para el Gobernador y los Magistrados del Tribunal, desde el día 1º de octubre de 1915 para terminar el 30 de septiembre de 1919. El período constitucional de la XXII Legislatura terminará el 14 de septiembre de 1919.

ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado en la primera de sus sesiones ordinarias del próximo período procederá al nombramiento de los Magistrados Supernumerarios que establece el artículo 104 de esta Constitución, y entre tanto toman posesión de su cargo, continuarán funcionando los actuales.

ARTÍCULO CUARTO. El Tribunal Superior de Justicia procederá oportunamente al nombramiento de los Jueces de Primera Instancia y Menores, que deben funcionar en el Estado conforme a las leyes vigentes, a fin de que los primeros tomen posesión de su cargo el día 1º de octubre próximo y los segundos a más tardar el 15 del mismo mes, para concluir el día 30 de septiembre de 1919.

ARTÍCULO QUINTO. Los actuales Ayuntamientos del Estado cesarán el día 31 de octubre próximo y a efecto de reemplazarlos, se faculta al Ejecutivo para que convoque desde luego a elecciones de Presidentes Municipales y Regidores, y para que haga a la Ley Electoral vigente las reformas que estime oportunas, a fin de que puedan instalarse los nuevos Ayuntamientos el día 1º de noviembre de este año, debiendo terminar su período el día 30 de septiembre de 1919.

ARTÍCULO SEXTO. En las próximas elecciones municipales no será impedimento para los candidatos estar comprendidos en la fracción I del artículo 143 de esta Constitución, siempre que se separen definitivamente de sus puestos el día que comience a regir en cada localidad la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Instalados los nuevos Ayuntamientos, procederán desde luego al nombramiento de los Jueces Municipales que deben funcionar en sus respectivas demarcaciones. entre tanto, seguirán funcionando los actuales Jueces de Paz.

ARTÍCULO OCTAVO. Las cuentas generales del Estado y las Municipales, correspondientes al período preconstitucional, se presentarán para su glosa, a la Contaduría General de Hacienda a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO NOVENO. La presente Constitución substituye a la del Estado, promulgada el 16 de septiembre de 1879.

ARTÍCULO DÉCIMO. Se derogan las leyes, decretos y reglamentos vigentes en el Estado, en todo lo que se opongan al cumplimiento de la presente Constitución.

Dada en el Salón de Sesiones del H. Congreso, de Querétaro, a cuatro de septiembre de mil novecientos diez y siete.- Presidente, LIC. BENITO REYNOSO, 1er. Diputado por la Municipalidad de Querétaro.- Vicepresidente, LIC. ROBERTO NIETO, 1er. Diputado de la Municipalidad de Cadereyta.- JUVENTINO RUIZ ALFARO.- Diputado por la Municipalidad de Amealco. JOSE OROZCO JR., 2do. Diputado por la Municipalidad de Cadereyta.- JOSE F. MARROQUIN, 2do diputado por la Municipalidad de Querétaro.- LIC. LUIS GÓMEZ, 3er. Diputado por la Municipalidad de Querétaro.- MARIO RETANA, 4to. Diputado por la Municipalidad de Querétaro.- PEDRO ARGAIN, 2do. Diputado Suplente por la Municipalidad de San Juan del Río.- EUGENIO MENDOZA, 1er. Diputado por la Municipalidad de Tolimán.- Secretario, DR. CARLOS ALCOCER, 5to. Diputado por la Municipalidad de Querétaro.- Secretario, GUILLERMO ALCANTARA, 1er. Diputado por la Municipalidad de San Juan del Río. Prosecretario, ISMAEL M. UGALDE, 2do. Diputado por la Municipalidad de Tolimán.

Por tanto mando se imprima, circule y publique por bando solemne, en todo el Estado, para su debido cumplimiento.

Dada en el Palacio de Gobierno, a nueve de septiembre de mil novecientos diez y siete.

El Gobernador Constitucional

ERNESTO PERRUSQUÍA

El Srío. General de Gobierno

LIC. J. RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 3 DE ENERO DE 1991

ARTÍCULO PRIMERO. Estas reformas a la Constitución entrarán en vigor el día cinco de febrero de mil novecientos noventa y uno.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a estas reformas.

ARTÍCULO TERCERO. La legislación secundaria deberá adecuarse a las modificaciones incorporadas en esta Constitución.

ARTÍCULO CUARTO. Para los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 80 de esta Constitución, se empezará a contar a partir del censo de 1990.

TRANSITORIO DE LAS REFORMAS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1993

ARTÍCULO ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

TRANSITORIO DE LAS REFORMAS DEL 7 DE JULIO DE 1994

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan a la presente.

TERCERO. Durante el próximo periodo de sesiones de la Legislatura del Estado, deberá hacerse la elección de los magistrados necesarios para dar cumplimiento al artículo 66 de esta Constitución.

CUARTO. Durante el próximo periodo de sesiones de la Legislatura del Estado, se deberá expedir la Ley Electoral del Estado que atienda las reformas contempladas por esta iniciativa.

QUINTO. Una vez que se integre el Tribunal Superior de Justicia en los términos señalados por esta Constitución, de inmediato se procederá a la integración de la Sala Electoral del mismo, la que funcionará independiente de las Salas Civil y Penal que actualmente constituyen ese cuerpo colegiado.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1997

ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes reformas, adiciones y derogaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan derogadas las disposiciones que contravengan a las presentes reformas, adiciones y derogaciones.

ARTÍCULO TERCERO. Para efecto de las presentes reformas, adiciones y derogaciones, será necesaria la expedición de la reglamentación correspondiente, entendiéndose que no tienen un carácter auto aplicativo.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1999

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 25 DE FEBRERO DE 2000

ÚNICO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, derogándose las disposiciones que se opongan a la presente.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. La adecuación a las leyes se llevará a cabo a más tardar en el plazo de un año, contando a partir de la vigencia de la presente ley.

TERCERO. El Estado y los Municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los convenios que en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, se ajusten a lo establecido por ésta, así como a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento de la presente Ley, se respetarán los derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros así como los derechos de los trabajadores estatales y municipales.

QUINTO. Las funciones y servicios que conforme a esta Ley sean competencia de los Municipios, seguirán prestándose en los términos y condiciones vigentes, hasta en tanto se realiza la transferencia a favor de éstos, conforme al programa que presente el Gobierno del Estado a solicitud de los Ayuntamientos.

Tratándose de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, el Gobierno del Estado podrá solicitar a la Legislatura conservar en su ámbito de competencia dichos servicios, cuando la transferencia a los Municipio afecte en perjuicio de la población, su prestación.

SEXTO. Se deja en suspenso la vigencia de la fracción IV del artículo 70 de la presente Ley, hasta en tanto se realicen las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y demás leyes aplicables.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2005

ÚNICO: Las disposiciones relativas a la duración del cargo de magistrados y jueces serán aplicables a los nombramientos hechos posteriormente a la entrada en vigor de las presentes reformas, por lo que aquellos que actualmente ocupen los cargos lo harán en los términos establecidos al momento de su designación o ratificación.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 31 DE ENERO DE 2006

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, una vez verificado el procedimiento a que se refiere el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga.

SEGUNDO. La Legislatura del Estado tendrá 30 hábiles contados a partir del inicio de vigencia de la presente Ley para expedir la Ley Reglamentaria de la Entidad Superior de Fiscalización.

TERCERO. Una vez que entre en vigor la Ley reglamentaria de la Entidad, el personal administrativo y los recursos materiales y financieros de que actualmente dispone la Contaduría Mayor de Hacienda de la Legislatura del Estado, pasarán a formar parte de esta Entidad Superior de Fiscalización, observándose en lo conducente las disposiciones de la Ley para la entrega-recepción administrativa en el Estado de Querétaro La Legislatura, una vez que entre en vigor la ley reglamentaria de la Entidad, designará conforme a los procedimientos y requisitos señalados en el texto constitucional y legal al titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.

Las reformas realizadas a los artículos 41 fracciones XV y XXV, 47, y 87 de la presente Ley, entrarán en vigor una vez que se inicie su vigencia de la Ley reglamentaria de la Entidad.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 12 DE ENERO DE 2007

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE. APROBADO EN DEFINITIVA EN EL SALÓN DE SESIONES "CONSTITUYENTES DE 1916-1917" RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, UNA VEZ HECHO EL COMPUTO CORRESPONDIENTE DE LOS VOTOS EMITIDOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.

A T E N T A M E N T E

LV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERETARO

MESA DIRECTIVA

DIP. ARTURO RODRÍGUEZ CERVANTES

VICEPRESIDENTE

Lic. Francisco Garrido Patrón, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 57, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga; expido y promulgo la presente Ley que reforma los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 relativos al Capítulo Único del Título Primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga; en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, el día once del mes de enero del año dos mil siete, para su debida publicación y observancia.

Lic. Francisco Garrido Patrón

Gobernador Constitucional del Estado

de Querétaro

Lic. José Alfredo Botello Montes

Secretario de Gobierno

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DEL 12 DE ENERO DE 2007

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.